

Libertad sindical, negociación colectiva y huelga

Homenaje al profesor Juan García Blasco

José Luis Monereo Pérez
Ángel Luis de Val Tena
(dirección y coordinación)

 Derecho del Trabajo
y Seguridad Social

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Y HUELGA

COLECCIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Director

Antonio V. Sempere Navarro

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
Rey Juan Carlos (s.e.) y Magistrado de la Sala IV del Tribunal Supremo

Consejo Asesor

Yolanda Cano Galán, Profesora Titular de la Universidad Rey Juan Carlos.

María Emilia Casas Baamonde, Catedrática de la Universidad Complutense, presidenta
de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expresidenta
del Tribunal Constitucional.

Susana Rodríguez Escanciano, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social,
Universidad de León.

Joaquín García Murcia, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

Antonio Ojeda Avilés, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad
de Sevilla.

Lourdes López Cumbre, Catedrática de la Universidad de Cantabria.

Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Carmen Sánchez Trigueros, Catedrática de la Universidad de Murcia.

LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA

**ESTUDIOS SOBRE LA RECIENTE JURISPRUDENCIA
EN HOMENAJE AL PROFESOR JUAN GARCÍA BLASCO
CON MOTIVO DE SU JUBILACIÓN**

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ Y ÁNGEL LUIS DE VAL TENA
(dirección y coordinación)

31

COLECCIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Primera edición: noviembre de 2024.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de *publicaciones*, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar.

La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados.

- © De los contenidos, sus autores.
- © Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado



Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons-Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional-CC BY-NC-ND 4.0

<https://cpage.mpr.gob.es>

NIPO: 144-24-224-6 (edición en papel)
144-24-225-1 (edición en línea, PDF)
144-24-226-7 (edición en línea, ePUB)

ISBN: 978-84-340-3014-5

Depósito legal: M-25277-2024

IMPRENTA NACIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

A Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza, por su magisterio excelente, su generosidad y su compromiso permanente con la universidad, desde la amistad y con el reconocimiento de sus discípulos y compañeros.



«Nuestra aportación presente al Derecho del Trabajo, pienso, no consiste en vivir al día y lamentar la fragmentación del patrimonio común del trabajo dependiente, que con tanto esfuerzo se conquistó, sino, mejor, en llegar a conocer el signo de estos nuevos tiempos y en defender los valores personales y los medios jurídicos que garantizan la libertad y dignidad de los trabajadores en la sociedad civil y en la economía, para intentar, así, que las normas conjuguen la lógica de la racionalidad económica con la protección de aquellos, sin aceptar un compromiso incuestionado con la ideología de la técnica y de la competencia empresarial como los valores supremos.»

Juan RIVERO LAMAS, «Poderes, libertades y derechos en el contrato de trabajo», Civitas, *Revista Española de Derecho del Trabajo*, núm. 80, 1996, pp. 969-970.

ÍNDICE

	<u>Páginas</u>
TRES SEMBLANZAS	21
I. Juan García Blasco, un universitario ejemplar. <i>Manuel González Labrada y Ángel Luis de Val Tena</i>	23
II. Juan García Blasco, semblanza personal y académica. <i>Javier Gárate Castro, Joaquín García Murcia, Salvador del Rey Guanter y Antonio V. Sempere Navarro</i>	30
III. Juan García Blasco, semblanza intelectual y científica. <i>José Luis Monereo Pérez</i>	41
LIBERTAD SINDICAL.....	55
1. Libertad sindical y prohibición general de la huelga de los funcionarios públicos. Comentario a la STEDH de 14 de diciembre de 2023, Humpert y otros c. Alemania. <i>Antonio Martín Valverde</i>	57
2. La representatividad como criterio para diferenciar entre las organizaciones sindicales. Comentario a la STC 63/2024, de 10 de abril (BOE de 15 de mayo de 2024). <i>Carlos L. Alfonso Mellado y Gemma Fabregat Monfort</i>	71
3. Manifestaciones sindicales prohibidas en el confinamiento de la covid para preservar la salud pública. ¿Y el derecho de libertad sindical? Comentario de la STC 88/2023, de 18 de julio (BOE de 28 de agosto de 2023). <i>María Emilia Casas Baamonde</i>	79

	Páginas
4. Represalia empresarial desmedida contra libertad de expresión sindical en defensa de los trabajadores. Comentario a la STC 22/2023, de 27 de marzo (BOE 25 de abril de 2023). <i>José Ignacio García Ninet ..</i>	89
5. Listas sindicales incompletas y tutela de la libertad sindical. Comentario a la STC 142/2022, de 14 de noviembre (BOE de 24 de diciembre). <i>Carmen Sáez Lara</i>	97
6. La libertad de expresión como garantía multinivel de efectividad de la libertad sindical ¿O viceversa? Comentario a la STC 120/1990, de 15 de diciembre (BOE de 26 de enero de 2021). <i>Cristóbal Molina Navarrete</i>	103
7. La libertad sindical como garantía para la acción judicial. Comentario a la STC 89/2020, de 20 de julio (BOE de 15 de agosto de 2020). <i>Gregorio Hervás Castro.....</i>	109
8. La protección frente a injerencias empresariales de la libertad de expresión, en cuanto que manifestación del ejercicio de la libertad sindical. Comentario a la STC 126/2018, de 26 de noviembre (BOE de 24 de diciembre de 2018). <i>Jesús Martínez Girón.....</i>	115
9. Contenido adicional de la libertad sindical: la prioridad de permanencia en la empresa como garantía mejorada por convenio. Comentario a la STC 123/2018, de 12 de noviembre (BOE de 14 diciembre de 2018). <i>Juan José Fernández Domínguez.....</i>	119
10. Ponderando la libertad de expresión: la inmunidad de su ejercicio por los representantes de los trabajadores frente a personas que ejercen funciones públicas. Comentario a la STC 89/2018, de 6 de septiembre (BOE de 12 de octubre de 2018). <i>Jesús R. Mercader Uguina.....</i>	125
11. ¿Un paso atrás en la jurisprudencia del TC sobre la protección del derecho constitucional de libertad sindical en su vertiente funcional? Comentario a la STC 64/2016, de 11 de abril (BOE de 20 de mayo de 2016). <i>Eduardo Rojo Torrecilla</i>	133
12. Despido por violación del derecho a la libertad sindical: la configuración jurisdiccional del llamado despido radicalmente nulo y de la carga de la prueba para su determinación. Comentario a la STC 38/1981, de 23 de noviembre de 1981 (BOE de 22 de diciembre de 1981). <i>Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer</i>	139
13. Cabos sueltos en el régimen de la mayor representatividad sindical. Comentario a la STS (C-A) 679/2024 de 22 de abril de 2024 (Rec. 740/2023). <i>Sofía Olarte Encabo.....</i>	145

14. ¿Vulneración del derecho de libertad sindical por no reconocer a una representante de la sección sindical como delegada sindical? Comentario a la STS 534/2024 de 9 de abril de 2024 (Rec. 2862/2021). <i>Cristina Sánchez-Rodas Navarro</i>	151
15. Libertad sindical y subrogación empresarial. Comentario a la STS 477/2024 de 14 de marzo de 2024 (Rec. 81/2022). <i>Virginia García Yebra y Germán García Yebra</i>	157
16. ¿Vulnera el derecho a la libertad sindical la tramitación de las elecciones a representantes de los trabajadores ante la oficina pública de forma electrónica? Comentario a la STS 476/2024 de 14 de marzo de 2024 (Rec. 62/2022). <i>Alejandro Muros Polo</i>	161
17. La protección de la libertad sindical y la negociación colectiva en la jurisprudencia reciente. Comentario a la STS 475/2024 de 13 de marzo de 2024 (Rec. 166/2022). <i>Farah Amaadachou Kaddur</i>	167
18. Nueva aportación jurisprudencial de la Sala Cuarta sobre las secciones sindicales conjuntas de personal laboral y funcionario y las prerrogativas que derivan de esa facultad organizativa. Comentario a la STS 462/2024 de 13 de marzo de 2024 (Rec. 240/2021). <i>María José Hernández Vitoria</i>	173
19. La libertad sindical se abre paso en el fútbol profesional a golpe de pronunciamientos judiciales. Comentario a la STS 441/2024 de 7 de marzo de 2024 (Rec. 226/2021). <i>Olimpia Molina Hermosilla</i>	179
20. El aterrizaje de la libertad sindical en el deporte profesional (una vez más, fútbol es fútbol). Comentario a la STS 441/2024 de 7 de marzo de 2024 (Rec. 226/2021). <i>Miguel Cardenal Carro</i>	185
21. ¿Injerencia antisindical o vulneración de la libertad de afiliación? Comentario a la STS 422/2024 de 6 de marzo de 2024 (Rec. 288/2022). <i>Wilfredo Sanguineti Raymond</i>	191
22. Exclusión de la comisión de seguimiento de un ERE de los sindicatos no firmantes del acuerdo de finalización de consultas; vulneración del derecho a la libertad sindical. Comentario a la STS 420/2024 de 5 de marzo de 2024 (Rec. 94/2022). <i>Sara Bendito Marqueta</i>	197
23. El incremento de la actividad productiva como causa válida de denegación de la realización de asambleas sindicales. Comentario a la STS 340/2024 de 22 de febrero de 2024 (Rec. 324/2021). <i>Carolina Gala Durán</i>	201

24.	La posibilidad de la empresa de establecer el deber de preavisar el disfrute del crédito horario por la trabajadora delegada de personal no vulnera el derecho a la libertad sindical. Comentario a la STS 289/2024 de 14 de febrero de 2024 (Rec. 814/2021). <i>María José Lopera Castillejo</i>	207
25.	El derecho del delegado sindical no miembro del comité de empresa a recibir información de la empresa. Comentario a la STS 273/2024 de 13 febrero de 2024 (Rec. 159/2021). <i>José Luis Goñi Sein</i>	213
26.	Sobre concurrencia de conflicto individual con conflicto colectivo. Comentario a la STS 250/2024 de 16 de enero de 2024 (Rec. 423/2023). <i>Antonio Ojeda Avilés</i>	219
27.	Las aplicaciones informáticas (<i>apps</i>) son una herramienta válida para la transmisión de información sindical, en determinadas condiciones. Comentario a la STS 545/2023 de 12 de septiembre de 2023 (Rec. 100/2021). <i>José María Miranda Boto</i>	227
28.	Despido de representantes sindicales y funciones representativas. Comentario a la STS 295/2023 de 25 de abril de 2023 (Rec. 4371/2019). <i>Federico Durán López</i>	233
29.	El derecho a informar a los representados como contenido esencial del derecho de libertad sindical: control de la información y limitación del uso de medios electrónicos disponibles en la empresa. Comentario a la STS 294/2023 de 25 de abril de 2023 (Rec. 334/2021). <i>Ángel Luis de Val Tena</i>	239
30.	Libertad sindical y utilización de medios telemáticos de la empresa: el papel del convenio colectivo. Comentario a la STS 71/2023 de 25 de enero (Rec. 62/2021). <i>José María Goerlich Peset</i>	247
31.	Garantías de los miembros designados por la empresa en el comité de seguridad y salud. Comentario a la STS 1244/2021 de 9 de diciembre de 2021 (Rec. 1253/2019). <i>Sonia Isabel Pedrosa Alquézar</i>	253
32.	Libertad sindical y sindicato de trabajadoras sexuales. Comentario a la STS 584/2021 de 1 de junio de 2021 (Rec. 29/2019). <i>Manuel Carlos Palomeque López</i>	257
33.	Desencuentro entre el derecho a la libertad sindical y el derecho a la protección de datos. La importancia de justificar las peticiones de información laboral. Comentario STS (C-A) 160/2021 de 9 de febrero de 2021 (Rec. 1229/2020). <i>M. Carmen Aguilar Martín</i>	261

34.	La restricción de las comunicaciones sindicales en papel con motivo de la protección de datos personales. Comentario a la STS 1033/2020 de 25 noviembre de 2020 (Rec. 39/2019). <i>Rafael Álvarez Gimeno</i>	267
35.	Posibles conductas antisindicales. Importa algo más que el resultado. Comentario a la STS 1097/2021 de 10 de noviembre (Rec. 110/2020). <i>María Dolores García Valverde</i>	273
36.	La actuación como abogado o como vocero de un liberado sindical contra la propia administración en la que presta sus servicios. Una dimensión compleja de la libertad sindical sin conflicto de intereses. Comentario a la STS (C-A) 1445/2020 de 4 de noviembre del 2020 (Rec. 3721/2018). <i>J. Jesús de Val Arnal</i>	279
37.	Ámbito funcional organizativo de la libertad sindical. Comentario a la STS 200/2020 de 4 de marzo de 2020 (Rec. 222/2018). <i>Jesús Divassón Mendivil</i>	285
38.	Libertad sindical negativa y deporte profesional. Comentario a la STS 6/2020 de 8 de enero de 2020 (Rec. 216/2018). <i>Manuel Correa Carrasco</i>	289
39.	El derecho a la libertad sindical en las cooperativas de trabajo asociado. Comentario a la STS 347/2019 de 8 de mayo de 2019 (Rec. 42/2018). <i>María Antonia Castro Argüelles</i>	295
40.	Libertad de expresión y libertad sindical en un contexto de conflicto: juicio de ponderación y sacrificio de derechos. Comentario a la STS (Civil) 385/2018 de 21 de junio de 2018 (Rec. 5042/2017). <i>Ana de la Puebla Pinilla</i>	301
41.	Condena a los sindicatos CCOO y ATP-SAE a reparar la lesión del derecho de libertad sindical del sindicato UTIL impidiendo su integración en los comités interempresas de un grupo empresarial. Comentario a la SAN 12/2024 de 30 de enero de 2024 (Rec. 290/2023). <i>Luis Enrique de la Villa Gil</i>	307
	NEGOCIACIÓN COLECTIVA.....	313
42.	Información y consulta: comisión negociadora y legitimados. Comentario a la STJUE 5 de octubre de 2023 (C-496/22), asunto EI y SC Brink's Cash Solutions SRL. <i>Pompeyo Gabriel Ortega Lozano</i>	315
43.	¿Pueden los presupuestos autonómicos suspender condiciones retributivas del personal del sector público, previamente fijadas a través de la negociación? Comentario a la STC 127/2019, de 31 de octubre de 2019 (BOE de 6 de diciembre de 2019). <i>Ane Vázquez Beltrán</i>	321

	Páginas
44. La imposibilidad de delimitar la unidad electoral laboral básica por la negociación colectiva. Comentario a la STS 739/2024 de 28 de mayo de 2024 (Rec. 12/2022). <i>Manuel García Muñoz</i>	329
45. Plan de igualdad no negociado por «incomparecencia» sindical. Comentario a la STS 545/2024 de 11 de abril (Rec. 123/2023). <i>Ignacio García-Perrote Escartín</i>	335
46. Legitimación para impugnar la modificación de un convenio colectivo negociado por una comisión tras un periodo largo de inactividad desde su constitución. Comentario a la STS 511/2024 de 20 de marzo de 2024 (Rec. 102/2022). <i>Manuel González Labrada</i>	341
47. Primacía del convenio colectivo sectorial sobre los pactos individuales. Comentario a la STS 509/2024 de 20 de marzo de 2024 (Rec. 98/2022). <i>Arturo Acebal Martín</i>	347
48. Conflicto colectivo: interpretación permisos retribuidos. Comentario a la STS 496/2024 de 20 de marzo de 2024 (Rec. 79/2022). <i>Miguel Marzo Ramo</i>	353
49. La legitimación «sindical» para negociar en la empresa: entre la ley y la jurisprudencia. Comentario a la STS 472/2024 de 13 marzo de 2024 (Rec. 56/2022). <i>Gloria P. Rojas Rivero</i>	359
50. Representatividad de los firmantes del convenio colectivo: una gran laguna legal, difícil de cubrir. Comentario a la STS 454/2024 de 12 de marzo de 2024 (Rec. 328/2021). <i>Antonio Márquez Prieto</i>	365
51. Legitimación negocial en los planes de igualdad de grupo de empresas. Comentario a la STS 448/2024 de 7 marzo de 2024 (Rec. 83/2022). <i>Iñigo Sagardoy de Simón</i>	371
52. Respeto a previos acuerdos colectivos al organizar el registro de jornada. Comentario a la STS 410/2024 de 5 de marzo de 2024 (Rec. 143/2021). <i>Carmen Sánchez Trigueros</i>	377
53. Dinámica de la legitimación negocial colectiva. Comentario a la STS 342/2024 de 22 febrero (Rec. 23/2022). <i>Antonio V. Sempere Navarro</i>	383
54. La inadmisibles exclusión del ámbito personal del convenio colectivo fundada en el encuadramiento profesional ajeno a este. Comentario a la STS 14/2024 de 8 de enero de 2024 (Rec. 1325/2022). <i>Javier Gárate Castro</i>	389

55.	Negociación de convenio colectivo y medición de la representatividad sindical: lmites del anclaje temporal de la medición cuando se lesiona el derecho de libertad sindical. Comentario a la STS 1053/2023 de 30 de noviembre de 2023 (Rec. 98/2021). <i>María Nieves Moreno Vida</i>	395
56.	Una vez más sobre la doble escala salarial, en este caso a propósito del complemento de antigüedad. Comentario a la STS 1000/2023 de 28 de noviembre (Rec. 164/2021). <i>Joaquín García Murcia</i>	401
57.	El convenio colectivo aplicable en caso de sucesión de contratas cuando una de ellas es un centro especial de empleo: una vieja cuestión abierta a nuevos interrogantes. Comentario a la STS 459/2023 de 28 de junio de 2023 (Rec. 4205/2020). <i>Yolanda Maneiro Vázquez</i>	409
58.	Legitimación sindical inicial para la negociación de convenios de empresa. Comentario a la STS 267/2023 de 12 de abril de 2023 (Rec. 4/2021). <i>Jesús Cruz Villalón</i>	415
59.	Ámbito funcional del convenio colectivo y falta de legitimación de la comisión negociadora para limitar la actividad de las empresas de trabajo temporal en cuanto excluidas de ese ámbito. Comentario a la STS 255/2023 de 11 de abril de 2023 (Rec. 86/2021). <i>Salvador del Rey Guanter</i>	421
60.	Los premios por jubilación previstos en la negociación colectiva de los empleados públicos. Comentario a la STS (C-A) 250/2023 de 28 de febrero de 2024 (Rec. 3554/2021). <i>Juan Antonio Maldonado Molina</i> ...	427
61.	Funciones de la comisión paritaria y vulneración del derecho a la libertad sindical. Comentario a la STS 946/2022 de 30 de noviembre de 2022 (Rec. 29/2020). <i>Sara Rico Letosa</i>	433
62.	Legitimación para impugnar convenios colectivos por ilegalidad y/o lesividad. Comentario a la STS 664/2022 de 13 de julio de 2022 (Rec. 161/2020). <i>Faustino Cavas Martínez</i>	439
63.	Negociación colectiva en la empresa y ausencia de representación legal de las personas trabajadoras. Comentario a la STS 383/2022 de 28 de marzo de 2022 (Rec. 359/2020). <i>Ruth Vallejo Da Costa</i>	445
64.	La negociación de los planes de igualdad en las administraciones públicas. Comentario a la STS (C-A) 222/2022 de 22 de febrero de 2022 (Rec. 20/2021). <i>Remedios Roqueta Buj</i>	451
65.	La concurrencia de convenios colectivos durante la vigencia ultraactiva del convenio precedente. Comentario a la STS 958/2021 de 5 de octubre de 2021 (Rec. 4815/2018). <i>Tomás Sala Franco</i>	457

	Páginas
66. Negociación de los planes de igualdad <i>versus</i> negociación colectiva: las comisiones <i>ad hoc</i> a debate. Comentario a la STS 95/2021 de 26 de enero de 2021 (Rec. 50/2020). <i>Belén del Mar López Insua</i>	461
67. Concurrencia de convenios en casos de extensión de su vigencia temporal inicial. Comentario a la STS 26/2021 de 13 de enero de 2021 (Rec. 191/2019). <i>Juan Bonilla Blasco</i>	467
68. Calendario de vacaciones, descuelgue del convenio y pactos individuales en masa. Comentario a la STS 15/2021 de 13 de enero de 2021 (Rec. 104/2019). <i>Vicente Pedro Lafuente Pastor</i>	471
69. Análisis de legalidad de la doble escala salarial. Comentario a la STS 1045/2020 de 1 de diciembre de 2020 (Rec. 52/2019). <i>José-Ramón Til Aisa</i>	477
70. Presunción de representatividad empresarial. Comentario a la STS 801/2018 de 19 de julio de 2018 (Rec. 169/2017). <i>Jesús Lahera Forteza</i>	483
71. Aplicación del convenio colectivo de ámbito superior tras la desaparición de un convenio por el transcurso del (desaparecido) plazo máximo de ultraactividad. Comentario a la STS 588/2018 de 5 de junio de 2018 (Rec. 427/2017). <i>Camino Ortiz de Solórzano Aurusa</i> ..	489
72. Reglas sobre estructura de la negociación, estrategias sindicales y libertad sindical (antes de la irrupción nacionalista con el RDL 2/2024). Comentario a la STS 269/2018 de 13 marzo de 2018 (Rec. 54/2017). <i>Federico Navarro Nieto</i>	495
73. Legitimación para denunciar convenios colectivos. Comentario a la STS 1035/2016 de 2 de diciembre de 2016 (Rec. 14/2016). <i>Juan Gorelli Hernández</i>	501
74. Renegociación y replanteamiento de una modificación de convenio ante la CCNCC. Comentario a la STS de 15 de septiembre de 2015 (Rec. 218/2014). <i>Ignacio González del Rey Rodríguez</i>	507
75. Aplicación del principio de correspondencia a la negociación colectiva de empresa o nivel inferior. Comentario a la STS de 20 de mayo de 2015 (Rec. 6/2014). <i>Magdalena Nogueira Guastavino</i>	513
76. A vueltas con la determinación del convenio colectivo aplicable a empresas multiservicios: entre la unidad de empresa y la especificidad. Comentario a la STS de 17 de marzo de 2015 (Rec. 1464/2014). <i>María de los Reyes Martínez Barroso</i>	519

77. ¿No se pueden pactar complementos para reducir el absentismo en las empresas por medio de negociación colectiva? Comentario a la SAN 18/2024 de 13 de febrero de 2024 (Rec. 306/2023). <i>Jordi García Viña</i>	525
HUELGA	531
78. Derecho de huelga en los servicios esenciales y servicios mínimos exorbitantes. Comentario a la STC 2/2022, de 24 de enero (BOE de 23 febrero 2023). <i>Antonio Baylos Grau</i>	533
79. Límites a la convocatoria de huelgas simultáneas en una misma empresa. Comentario a la STC 130/2021, de 21 de junio de 2021 (BOE de 31 de julio de 2021). <i>María Pilar Callau Dalmau</i>	539
80. Esquirolaje empresarial y derecho de huelga: límites al poder de dirección en la empresa. Comentario a la STC 17/2017, de 2 de febrero de 2017 (BOE de 10 de marzo de 2017). <i>Margarita Isabel Ramos Quintana</i>	545
81. La controvertida exigencia de responsabilidad civil extracontractual por la actuación de piquetes coactivos de huelga. Comentario a la STC 69/2016, de 14 de abril de 2016 (BOE de 20 de mayo de 2016). <i>Alberto Arufe Varela</i>	551
82. La posibilidad del ejercicio del derecho de huelga de las personas trabajadoras no huelguistas: inconcreción temporal necesitada de protección. Comentario a la STC 45/2016, de 14 de marzo (BOE de 22 de abril de 2016). <i>Francisco Javier Hierro Hierro</i>	557
83. Sobrevenida pérdida de vigencia de un pacto sobre servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga: <i>Rebus sic stantibus versus pacta sunt servanda</i> . Comentario a la STS 940/2024 de 25 de junio de 2024 (Rec. 209/2022). <i>José Luján Alcaraz</i>	563
84. La naturaleza ilegal o abusiva de la huelga. Comentario a la STS 444/2024 de 7 de marzo (Rec. 16/2022). <i>Santiago González Ortega</i>	569
85. Alcance y eficacia de los acuerdos de fin de huelga. Comentario a la STS 1186/2023 de 19 de diciembre de 2023 (Rec. 300/2021). <i>Francisco Vila Tierno</i>	575
86. Derecho de huelga y modalidades de esquirolaje: indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Comentario a la STS 962/2023 de 8 de noviembre (Rec. 204/2021). <i>José Luis Monereo Pérez</i>	581

	Páginas
87. Acerca de un supuesto tangente entre servicios esenciales y de mantenimiento. Comentario a la STS (C-A) 1264/2023 de 16 de octubre de 2013 (Rec. 953/2023). <i>Jaime Cabeza Pereiro</i>	595
88. Servicios mínimos <i>versus</i> servicios de mantenimiento y seguridad. Comentario a la STS (C-A) 1264/2023 de 16 de octubre de 2023 (Rec. 953/2023). <i>Raquel Yolanda Quintanilla Navarro</i>	601
89. Huelga en medios de comunicación informativos durante la pandemia. Comentario a la STS 537/2023 de 19 de julio de 2023 (Rec. 225/2021). <i>Susana Torrente Gari</i>	607
90. Doctrina del Tribunal Supremo sobre la huelga novatoria. Comentario a la STS 468/2023 de 4 de julio de 2023 (Rec. 224/2021). <i>Juan Molins García-Atance</i>	613
91. Derecho de huelga y servicios mínimos en el sector sanitario. Comentario a la STS 417/2023 de 9 de junio de 2023 (Rec. 263/2021). <i>Natalia Tomás Jiménez</i>	617
92. Sobre el uso abusivo de la potestad organizativa empresarial para minimizar los efectos de la huelga: obstrucción del derecho, esquirolaje interno e indemnización por daños. Comentario a la STS 273/2023 de 13 de abril de 2023 (Rec. 217/2021). <i>Sara Alcázar Ortiz</i>	625
93. Premios de asistencia, negociación colectiva y ejercicio del derecho de huelga. Comentario a la STS 128/2023 de 9 de febrero de 2023 (Rec. 2354/2020). <i>Yolanda Sánchez-Urán Azaña</i>	631
94. Huelga ilícita por abusiva y fraudulenta. Comentario a la STS 953/2022 de 13 de diciembre de 2022 (Rec. 13/2021). <i>Ángel Blasco Pellicer</i>	637
95. No hay derecho de huelga si no se tutela al trabajador que lo ejercita. Comentario a la STS 498/2022 de 31 de mayo de 2022 (Rec. 601/2021). <i>Miguel Rodríguez-Piñero Royo</i>	643
96. Delimitación conceptual y prueba en la huelga estratégica o «de tapón». Comentario a la STS 304/2022 de 5 de abril de 2022 (Rec. 108/2020). <i>Helena Santor Salcedo</i>	649
97. Conculcación del derecho a la libertad sindical ante un pacto fin de huelga en el que no participan los sindicatos legitimados. Comentario a la STS 1085/2021 de 3 de noviembre de 2021 (Rec. 22/2020). <i>Susana Rodríguez Escanciano</i>	655

98.	Los directivos se remangan. Un nuevo caso de esquirolaje interno. Comentario a la STS 990/2021 de 6 de octubre de 2021 (Rec. 4983/2018). <i>Carolina Martínez Moreno</i>	661
99.	Sobre la interpretación del pacto de fin de huelga. Comentario a la STS 762/2021 de 7 de julio de 2021 (Rec. 179/2019). <i>Ana Aguas Blasco</i>	667
100.	El deber empresarial de prevenir el esquirolaje interno. Comentario a la STS 499/2021 de 6 de mayo de 2021 (Rec. 4975/2018). <i>Iciar Alzaga Ruiz</i>	673
101.	La vulneración del derecho de huelga a través del esquirolaje interno en el grupo de empresas. Comentario a la STS 153/2021 de 3 de febrero de 2021 (Rec. 36/2019). <i>Jorge Serraller Manzorro</i>	679
102.	Convocatoria de huelga y objetivos de la huelga. Comentario a la STS 787/2020 de 22 de septiembre de 2020 (Rec. 185/2018). <i>Miguel Ángel Almendros González</i>	685
103.	Limitaciones en el <i>ius variandi</i> por el derecho fundamental de huelga. Comentario a la STS 13/2020 de 13 de enero de 2020 (Rec. 138/2018). <i>Pablo José Castillo Morales</i>	691
104.	Huelga y esquirolaje tecnológico: recursos productivos o sistemas de redistribución de tareas. Comentario a la STS 624/2017 de 13 de julio de 2017 (Rec. 25/2017). <i>Sara Guindo Morales</i>	695
105.	Huelga ilegal y composición del comité de huelga. Comentario de la STS 328/2019 de 25 abril de 2019 (Rec. 236/2017). <i>Elisa Sierra Hernaiz</i>	701
106.	Revisión judicial de una plétora de conductas empresariales frente a una huelga y de la indemnización procedente. Comentario a la SAN 142/2023 de 22 de diciembre de 2023 (Rec. 159/2023). <i>Ferran Camas Roda</i>	707
DERECHO ITALIANO.....		715
107.	Il principio costituzionale di libertà contrattuale applicato al lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la corte costituzionale bacchetta il legislatore. Comentario a la sentencia de la Corte Costituzionale 178/2015, de 23 de julio (<i>Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana</i> n. 30 de 29 de julio de 2015). <i>Cinzia De Marco y Alessandro Garilli</i> ...	717
108.	La lunga marcia verso i diritti collettivi nel mondo militare. Comentario a la sentencia de la Corte Costituzionale 120/2018, de 13 de junio (<i>Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana</i> n. 25 de 20 de junio de 2018). <i>Silvio Bologna</i>	723

	Páginas
109. Part-time e rifiuto della formazione obbligatoria. Comentario a la Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 de julio de 2023, n. 20259, en https://www.italgiure.giustizia.it/ , <i>Marina Brolo</i>	729
110. Permessi sindacali e controlli: regole e funzioni. Comentario a la Cassazione Civile, Sez. Lav., de 23 de febrero de 2022, n. 8051, en https://www.italgiure.giustizia.it/ , <i>Anna Zilli</i>	735
RELACIÓN DE SENTENCIAS COMENTADAS	741
— Libertad sindical	743
— Negociación colectiva	746
— Huelga	749
BREVE RESUMEN DEL CURRÍCULUM VITAE DE JUAN GARCÍA BLASCO	753

**107. IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI LIBERTÀ
CONTRATTUALE APPLICATO AL LAVORO NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI: LA CORTE COSTITUZIONALE
BACCHETTA IL LEGISLATORE**

**Comentario a la sentencia de la Corte costituzionale 178/2015, de 23 de julio
(Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 30 de 29 de julio de 2015)**

CINZIA DE MARCO

Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad de Palermo

ALESSANDRO GARILLI

Profesor emérito de Derecho del Trabajo. Universidad de Palermo

Palabras clave: libertà sindacale, contrattazione collettiva, pubblico impiego.

1. Il diritto di libertà sindacale, che la Costituzione italiana del 1948 ha riconosciuto espressamente nell'art. 39, comma 1, icasticamente affermando che «L'organizzazione sindacale è libera», costituisce un diritto fondamentale, annoverabile tra i diritti inviolabili dell'uomo, che va letto in combinato disposto con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2. Infatti, esso, al pari dello sciopero (art. 40), attraverso l'associazione e l'azione dei sindacati, concorre a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori alla vita politica, sociale ed economica del Paese. Sicché si può affermare che tale libertà è immanente al concetto di democrazia. E, come tutte le libertà, quella sindacale non consente interferenze dei pubblici poteri e dei soggetti privati (i datori di lavoro), che non possono limitare o condizionare sia il diritto alla costituzione di organizzazioni che perseguono fini sindacali, sia soprattutto l'azione di queste a tutela degli interessi collettivi dei lavoratori. Ciò comporta che nell'eventuale conflitto tra libertà sindacale e libertà di impresa è la

prima a prevalere nel sistema costituzionale italiano. Il fatto che la titolarità è individuale (qui configurandosi come positiva e negativa) non toglie valore preminente alla sua valenza collettiva: infatti la sua funzione è di garantire ai cittadini la libertà di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la libertà di agire nell'interesse dei lavoratori. Vi è dunque un nesso funzionale che lega la libertà sindacale alla contrattazione collettiva, nel senso che nella prima è ricompresa la seconda con un rapporto di mutua implicazione. Il riconoscimento della libertà contrattuale non è solo l'esito dell'interpretazione del dato costituzionale in quanto esso è consacrato nelle fonti sovranazionali: tra di esse spiccano le Convenzioni OIL nn. 87 del 1948 e 98 del 1949, l'art. 11 della CEDU (nell'interpretazione estensiva della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo), l'art. 6 della Carta sociale europea rivodata nel 1996, l'art. 28 della CDFUE, gli artt. 152, comma 1, 154 e 155 del TFUE.

2. L'argomento che intendiamo sviluppare in questo breve scritto riguarda il diritto alla libertà di contrattazione collettiva nel settore del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che dagli anni 1992-93 è stato ricondotto, in linea di principio, al diritto privato del lavoro, anche con riguardo ai profili collettivi. Va ricordato che la legge assegna alla fonte collettiva, salvo alcune riserve relative a specifiche e tassative materie, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali; precisa poi che l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi a cui sono obbligate le amministrazioni, che da essi non possono discostarsi dovendo garantire parità di trattamento contrattuale.

Due tribunali (Roma e Ravenna) sollevavano questione di legittimità costituzionale di due leggi del 2010 e del 2011 che, a seguito della grave crisi finanziaria che dal 2008 attanagliava l'Italia, già sofferente per un altissimo e radicato debito pubblico, avevano imposto il blocco dei trattamenti economici (e delle pensioni) dei dipendenti pubblici. Secondo i giudici remittenti il «congelamento» delle retribuzioni dei pubblici dipendenti rientranti nel regime della contrattazione collettiva, senza alcuna possibilità di recupero, avrebbe prodotto un *vulnus* ai diritti sociali fondamentali, ponendosi in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto, di libertà di contrattazione collettiva. In sostanza si lamentava che le norme impugnate, trascendendo i limiti della transitorietà ed eccezionalità, perché gli effetti si sarebbero protratti nel tempo, avrebbero violato soprattutto due articoli della Costituzione: l'art. 36, che sancisce il principio della giusta retribuzione prescrivendo che questa deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; e l'art. 39, che, come ricordato, ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale, con la necessaria conseguenza che ogni compressione del diritto alla negoziazione collettiva si risolve inevitabilmente in una compressione della libertà

sindacale. In definitiva i due giudici sostenevano, per un verso, che il perdurare del blocco conducesse ad una retribuzione al di sotto del parametro costituzionale e, per l'altro, che il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica alterasse la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale. Entrambe le disposizioni venivano poi collegate al principio di eguaglianza, giacché la disciplina in esame avrebbe discriminato i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori privati e introdotto disparità di trattamento arbitrarie anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici, quelli privatizzati assoggettati al blocco e quelli in regime di diritto pubblico a cui la contrattazione non si applica.

3. Prima di passare all'esame della sentenza della Corte costituzionale è opportuno ricordare che analoga questione si era posta in altri paesi in default e perciò costretti a ricorrere ad aiuti da parte delle autorità economiche europee e internazionali. Tra questi vale la pena dare conto della vicenda giudiziaria del Portogallo che, pur non riguardando il tema della libertà sindacale, presenta spunti argomentativi interessanti in punto di bilanciamento tra esigenze di riduzione della spesa pubblica e diritti sociali fondamentali.

In una decisione del 5 luglio 2012, la Corte costituzionale portoghese ha ritenuto che la riduzione del pagamento dei sussidi per le ferie e per le festività natalizie alle categorie di pensionati del settore pubblico, come previsto dalla legge finanziaria statale del 2012, violava il principio di «uguaglianza proporzionale» ed era quindi incostituzionale. Tuttavia, dato che il bilancio 2012 era già in una fase avanzata di attuazione, e che sarebbe stato quindi impossibile per il Portogallo elaborare misure alternative per raggiungere i propri obiettivi di bilancio e assicurarsi il sostegno dei suoi finanziatori, che rispondeva a un «interesse pubblico eccezionalmente importante», la Corte costituzionale ha deciso che la sua pronuncia non avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2012. In pratica, ciò significava che i tagli avrebbero potuto essere attuati nel 2012.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, a cui si rivolsero due pensionati (STEDH de 8 de octubre de 2023, aplicaciones no. 62235/12 e 57725/12, António Augusto Da Conceição Mateus e Lino Jesus Santos Januário contra Portugal), ritenne proporzionato, rispetto alle esigenze «di interesse generale della comunità», il «taglio di salari e pensioni pagati nel settore pubblico» in quanto limitato «sia nel tempo sia in termini quantitativi». Dunque, secondo la Corte Edu, è ben possibile la compressione di un diritto fondamentale a condizione che questa sia transitoria e proporzionata alle finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. In altri termini il parametro di valutazione va individuato nella ragionevolezza delle misure sotto i profili della loro gravosità e dello sviluppo temporale. Certamente si tratta di un criterio che lascia elevati margini di discre-

zionalità, come del resto sempre accade nella tecnica del bilanciamento, attraverso cui selezionare e comparare valori.

4.- La Corte italiana nella sua decisione ha ben presente l'orientamento della Corte Edu (espresso in questa e in altre decisioni); non si limita a richiamarlo, ma ne utilizza il ragionamento in chiave funzionale alla dinamica evolutiva dei principi costituzionali. Esaminiamo brevemente gli argomenti contenuti nella sentenza.

Anzitutto è ribadita la legittimità –già affermata in decisioni precedenti– di interventi legislativi che, per fare fronte a esigenze eccezionali determinate da crisi economico-finanziarie, comportano riduzioni della spesa per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche. Una siffatta operazione è giustificata dalle prescrizioni contenute negli articoli della Costituzione 81 –secondo cui «lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico»– e 97 –che impone alle «pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea», di assicurare «l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». La Corte quindi si rifiuta di valutare se l'obiettivo indicato avrebbe potuto raggiungersi con una diversa e socialmente più accettabile ripartizione dei sacrifici tra soggetti e categorie meno vulnerabili, anche in considerazione della dimensione solidarista che connota la Costituzione (e che la Corte più volte richiama). Ma forse questa discutibile posizione è dettata dall'opportunità di evitare che l'attività giurisdizionale sconfini nella discrezionalità politica, alterando l'equilibrio tra i poteri.

Nega poi che siffatti provvedimenti possano violare il principio di eguaglianza con riguardo alla disparità di trattamento tra categorie di pubblici dipendenti soggetti al blocco e categorie indenni, nonché tra settore pubblico e settore privato. Si tratta di «fattispecie dissimili, che non possono fungere da utile termine di raffronto». In particolare, lavoro pubblico e lavoro privato presentano, «anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva», differenze sostanziali.

Superato questo primo scoglio, esaminando la dedotta violazione della tutela costituzionale della retribuzione, la Corte ritiene ragionevole e proporzionato l'impianto normativo giacché la dinamica retributiva pubblica nei dieci anni precedenti aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l'incremento delle retribuzioni del settore privato a parità di contenuto della prestazione lavorativa. Per lo stesso motivo è giustificata la sospensione della tornata contrattuale. Ma, secondo la Corte, lo scrutinio di legittimità non può fermarsi all'esame delle leggi censurate dai giudici *a quibus* in quanto va preso in esame l'intervento successivo contenuto nella legge di stabilità per il 2014, che ha disposto la sospensione delle procedure negoziali inerenti alla parte economica per il periodo 2013-2014 e la limitazione dell'ammontare dei trattamenti accessori. Intercorre, dunque, un nesso inscindibile tra le disposizioni specificamente impugnate e le disposizioni della legge di stabilità per il 2014.

Anche estendendo temporalmente lo scrutinio, la Corte ritiene non violato l'art. 36 Cost. per le considerazioni sopra esposte e perché le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Diversamente il blocco della contrattazione economica è stato prolungato dalla legge di stabilità per l'anno successivo per altri dodici mesi, ed era destinato a protrarsi ulteriormente come risultava dal fatto che la stessa legge aveva cristallizzato fino al 2018 ai valori del 2013 l'indennità di vacanza di contrattuale (prevista per colmare in parte i ritardi della contrattazione collettiva). Afferma la Corte che «L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del «blocco», si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma». In questo modo infatti la legge «altera la dinamica negoziale in un settore» in cui «il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte», che disciplina le relazioni sindacali e i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, tra cui in primo luogo il trattamento economico, nelle sue componenti fondamentali ed accessorie.

È importante sottolineare che la Consulta valorizza il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, smentendo il contrario avviso di parte della dottrina, che lo ritiene ancora eterodiretto. È pur vero che i provvedimenti legislativi del 2009 (Legge delega n. 15/2009 e D.lgs. n. 150/2009) hanno disposto una regolazione inderogabile di alcuni importanti frammenti di disciplina, ma va riconosciuto che il contratto collettivo nel settore svolge non solo la tradizionale «funzione di contemperare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione», ma si pone, «per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito», concorrendo a dare attuazione ai principi di efficienza e imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Questa «molteplicità di funzioni», che poggia su una «complessa trama di valori» affermati dalla Costituzione e dalle «numerose fonti sovranazionali», è vanificata dal protrarsi *ad libitum* della sospensione delle procedure negoziali, che produce uno squilibrio irragionevole tra la «libertà sindacale ... e le esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria».

La Corte, per queste considerazioni, salva le leggi impugnate quanto agli effetti già prodotti, e dichiara l'illegittimità costituzionale sopravvenuta facendo decorrere le conseguenze dell'annullamento a far data dalla pubblicazione della decisione stessa. Essa, infatti, così conclude: «Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialet-

tica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata».

Le argomentazioni e le conclusioni della sentenza hanno sollevato perplessità da una parte della dottrina, sia sotto il profilo processuale, in quanto il mutamento del parametro di costituzionalità è intervenuto in un tempo posteriore alla produzione dell'atto oggetto del giudizio, sia per gli aspetti sostanziali, per non avere colto il nesso inscindibile tra la salvaguardia della giusta retribuzione e la libertà sindacale, che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate anche per la loro violazione dell'art. 36 Cost. Ma, a ben vedere, la sentenza si pone in perfetta continuità con le altre corti su richiamate e ne attesta il proficuo dialogo.

Quanto alle parole conclusive, non v'è dubbio che esse hanno imposto al Governo e al Parlamento di apprestare risorse finanziarie per la riapertura della contrattazione nazionale. La qual cosa è avvenuta con l'apertura di nuove tornate contrattuali che hanno ridefinito gli assetti economici (e non solo) dei dipendenti pubblici. A questo indiscutibile risultato si accompagna inoltre un altro forse più importante merito ascrivibile alla sentenza: ponendo la contrattazione collettiva, specificamente quella del lavoro pubblico, in un solido scenario di diritti fondamentali, la Corte ha inteso presidiarla da ulteriori ingerenze eteronome che possano comprimerne il libero dispiegarsi.

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

- M. BARBIERI, «Contratto collettivo e lavoro pubblico: blocco salariale e blocco della contrattazione tra scelte legislative e giurisprudenza costituzionale», in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 3/2015, p. 453.
- L. M. DENTICI, «La retribuzione nel lavoro pubblico in tempi di crisi», in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, 4/2019, p. 60 ss.
- V. FERRANTE, «Anche per i dipendenti pubblici arriva l'ora della riscossa: la Corte dichiara l'incostituzionalità della proroga del blocco della contrattazione collettiva», in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 4/2015, pp. 1121 ss.
- P. ICHINO, *Sulla contrattazione nel pubblico una sentenza*, in <https://www.pietroichino.it - vademecum>, 24.7.2015.
- G. RICCI, «La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile dipendente?», in *WP C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona»*, 113/2014.
- L. ZOPPOLI, «La Corte finalmente costituzionalizza la contrattazione per il lavoro pubblico. E la retribuzione?», in *Diritti, lavoro, mercato*, 2015, p. 377 ss.